

dicen los autores, si se quiere llegar al cumplimiento de la política de economía social propuesta desde las tribunas electorales.

Finalmente, se incluye una selección de textos relativos a la Bogotá de 1938 y 1948: "A través de la vidriera" de Tomás Rueda Vargas; "Bogotá en 1938" de Luis Augusto Cuervo; "Bogotá 1948, servicios públicos" de Gustavo Samper Bernal; y "Zonas y barrios de Bogotá, 1948" por Alvaro Sanclemente.

Este libro, en su conjunto, presenta una propuesta de democratización real del Estado colombiano, partiendo de los niveles municipal y urbano. Tal proyecto político se analiza y fundamenta a partir de las condiciones de la ciudad capital, Bogotá, la cual vive situaciones que son vistas en gran parte como síntesis de realidades nacionales. La obra, que en este aspecto es valiosa, plantea, sin embargo, un problema de dimensión: si la democratización debe pasar necesariamente por lo urbano, el estudio de las condiciones de vida en la ciudad no se agota en los aspectos de utillaje material, servicios públicos y gobierno de la misma. En otras palabras, el control del espacio urbano y la recuperación de éste por los ciudadanos, debe entenderse también a partir de los usos y de las lecturas que los habitantes hacen del mismo: las lógicas culturales, las dominaciones que sobre ellas se ejercen y las resistencias que desde ellas se establecen, deben ser necesariamente introducidas en el análisis.

GERMÁN R. MEJÍA PAVONY

Protagonista de tres decenios

El jefe supremo

Rojas Pinilla en la violencia y el poder

Silvia Galvis, Alberto Donadio

Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 1988, 589 págs.

Este es un libro importante, necesario, pero desigual, acerca de un personaje que ejerció innegable influencia sobre la vida nacional en las décadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta. Rojas protagonizó el segundo golpe militar del presente siglo; su gobierno fue una dictadura militar folclórica y ominosa; su caída permitió la instauración del régimen del Frente Nacional, o sea, el de los gobiernos compartidos. Los tres hechos enumerados no se pueden olvidar, y este libro contribuye a reparar ese olvido.

El tema político, en cualquier parte, y sobre todo en Colombia, es enconado y vidrioso: exige una objetividad casi sobrehumana, que analice sin prejuicios todos los puntos de vista y realice un escrutinio minucioso del contexto de la época. Esta objetividad es elusiva cuando los historiadores tienen una formación ideológica determinada y radical, como es el caso que nos ocupa. Desecho la noción de que el historiador que posea unas ideas políticas definidas no está habilitado para escribir historia. Puede hacerlo, si guarda el suficiente equilibrio. Silvia Galvis y Alber-

to Donadio no siempre guardaron el equilibrio requerido.

Hay que reconocer en esta obra el hecho de que historiadores de origen liberal aceptan que hubo dos violencias, después de la guerra civil de los Mil Días: una liberal, en la década de los treinta, cuando llegó el liberalismo al poder con Olaya Herrera, y otra conservadora, cuando los conservadores reconquistaron el poder en 1946 (págs. 101-104). Este reconocimiento es un gran avance historiográfico, a pesar de que los autores tratan de explicar, o tal vez de justificar, la violencia liberal como una reacción de ese partido contra la presunta intolerancia del conservatismo y la Iglesia católica, que "en alianza de hierro, gobernaban a Colombia" (pág. 103).

A pesar del reconocimiento de las dos violencias y del aparato documental y técnico que sostiene la narración, los autores dejan deslizar con alguna frecuencia su pasión política contra el conservatismo.

Vale la pena copiar apartes pertinentes en que se describen las dos violencias:

La violencia tuvo su origen próximo el 7 de agosto de 1946, fecha en que el ingeniero antioqueño Mariano Ospina Pérez, nieto y sobrino de expresidentes, asumió la primera magistratura.

Recuperando el poder después de 16 años de abstinencia, los conservadores lo utilizaron en varias regiones con fines ilegales y delictivos para fortalecerse en él. [pág. 101].

Los liberales fueron destituidos de los puestos públicos, perseguidos, acosados en provincias y veredas, anatemizados por curas de pueblo y obispos de acreditado fanatismo. Se repitió, en la esencia, la reconquista violenta del poder de 1930 cuando los liberales, tras casi medio siglo de dominación conservadora, ganaron, con Enrique Olaya Herrera, el control del gobierno. [págs. 101-102].

Durante la administración del boyacense Olaya Herrera, llegado al solio presidencial por el



impulso de la división del conservatismo mayoritario, los dirigentes liberales de ciertos municipios de Santander intentaron liberalizar a la fuerza poblaciones tradicionalmente conservadoras, además de desbancar a sus opuestos de la nómina oficial. El mecanismo utilizado para esta misión fue la policía, la departamental y la municipal, que obedecían órdenes de alcaldes y gobernadores liberales, a su vez obedientes a los directorios políticos. Las balas policiales sirvieron para perseguir a los conservadores en los Santanderes y Boyacá, preferencialmente. La inscripción en los registros electorales, bajo coacción, de campesinos conservadores, como si fueran liberales, desató respuestas airadas y armadas, con las secuelas de matanzas, masacres y asesinatos de parte liberal y conservadora. Un cálculo publicado estima que unas diez mil personas murieron durante el gobierno de Olaya Herrera por estas causas. [pág. 102]

La visión es balanceada en apariencia, pero prejuiciada en el fondo. La violencia liberal tiene, para los autores, explicación, o tal vez justificación, como ya lo vimos. En la época del gobierno liberal, los verdugos y las víctimas, según los autores, fueron de lado y lado; no hacen la misma observación para la violencia registrada a partir de 1946, olvidando que el 9 de abril de 1948 casi todas las víctimas fueron conservadoras.



Las fuentes de algunas aseveraciones son de dudosa imparcialidad. Se dice, por ejemplo, que a Pasto fueron enviadas, de todo el Valle del Cauca, a raíz de los sucesos del 9 de abril de 1948, seis mil personas afiliadas al partido liberal, y se cita como fuente el periódico *El Liberal*, de Popayán, del 5 de septiembre de 1948 (pág. 120).

En el relato del 13 de junio de 1953 (pág. 252) se omite el motivo por el cual el presidente titular, Laureano Gómez, solicitaba del designado en ejercicio del poder, Roberto Urdaneta Arbeláez, la destitución de Rojas Pinilla como comandante de las fuerzas armadas. Como se sabe bien, el motivo de la solicitud eran las torturas padecidas por un ciudadano liberal, el señor Felipe Echavarría. También falta en ese relato la versión de Laureano Gómez sobre los antecedentes del golpe militar, que puede consultarse fácilmente, en el Primer Manifiesto a los Colombianos, escrito en Nueva York, en julio de 1953, por el presidente desterrado.

Es pertinente observar que para captar el estado de la opinión pública sobre el gobierno de Rojas los autores se apoyan en notas enviadas por la embajada de los Estados Unidos al departamento de Estado y no en opiniones nacionales (pág. 279). Este tipo de apoyo documental sobre hechos ocurridos durante ese gobierno puede justificarse, en algunos casos, no en todos, por la censura de prensa y la falta de información imparcial que eran frecuentes durante la dictadura rojista.

Citemos otro ejemplo en que la base documental es una nota de la embajada de los Estados Unidos al departamento de Estado: "La circular 310 que claramente restringía la libertad de culto consagrada constitucionalmente, recibió el apoyo de la jerarquía eclesiástica, e inclusive el Cardenal Luque sugirió que su esencia fuera incluida en la Constitución Colombiana (pág. 405). En este caso, los autores hubieran podido verificar perfectamente en fuentes nacionales la intervención de la jerarquía eclesiástica y del cardenal en este asunto. El episodio pudo ser verídico, pero una nota de la embajada estadounidense no debió constituir la biblia documental sobre este punto.

Hay otros casos de endeblez documental y de sectarismo político. En la página 514 los comentarios de los autores sobre los pactos del Frente Nacional son sectarios y están fundados en hojas volantes y en una conversación de funcionarios menores de la embajada de los Estados Unidos y del directorio nacional conservador que apoyaba a Rojas en 1955.

El juicio sobre el 10 de mayo de 1957 debería ser el juicio central del libro, y está equivocado. En la nota de pie de página 3, en las páginas 538 y 539, se lee: "Los defensores del general Rojas han afirmado siempre que el 10 de mayo fue obra exclusiva de la elite política y de las oligarquías y que el pueblo raso no participó en la jornada. Sin embargo, las declaraciones de la Unión de Trabajadores de Colombia tienden a moderar tal versión". El giro "moderar tal versión" no es apropiado. En esos días y en esa fecha (10 de mayo) hubo un verdadero levantamiento popular contra Rojas. Los desatinos, la corrupción y las arbitrariedades del régimen rojista habían colmado la paciencia de la mayoría del pueblo colombiano. Los dirigentes de ambos partidos y los estudiantes fueron el motor de la rebelión: ellos le dieron cauce y salida política a un descontento popular que sin lugar a dudas existía.

Compartimos la alarma de los autores por la incineración de los archivos de algunas dependencias oficiales correspondientes a la época descrita en este libro.

Consideramos que esta obra, a pesar de las flaquezas anotadas, es una contribución importante a la historiografía de una época difícil de nuestra historia. La época del odio partidista entre liberales y conservadores parece, por fortuna, cancelada para siempre. Otros odios y otras violencias nos azotan hoy. Pero las lecciones y la experiencia de esa época pueden servirnos para comprender los conflictos contemporáneos. El problema es que aquellos años no cuentan todavía con el historiador absolutamente imparcial que narre lo que ocurrió en la realidad. Por desgracia, es muy posible que ese tipo de historiador nunca aparezca en nuestro medio.

GERARDO BEDOYA B.